

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Cumplido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por ANA BEATRIZ PABÓN GONZÁLEZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, y la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA (Rad. No. 05001-31-05-008-2017-00538-01).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- a la abogada MARIA ALEJANDRA VALLEJO ARCILA, con tarjeta profesional No. 249.193 del C.S. de la J. conforme a la sustitución de poder que le fue conferido.

ANTECEDENTES

La señora Ana Beatriz Pabón González demanda a Colpensiones y a la Junta Regional de Invalidez de Antioquia con el fin de que declare la nulidad de unos dictámenes y que presenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, de origen común y fecha de estructuración el 25 de abril de 2004 y, en consecuencia, se condene a Colpensiones a reconocerle y pagarle la sustitución pensional causada por la muerte de su madre señora Ana Elvia

González Bustamante, quien era pensionada por Colpensiones y falleciera el 4 de agosto de 2011, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre; los intereses moratorios o, en subsidio, la indexación; y las costas del proceso (fls. 2/3).

Como sustento de sus pretensiones, manifiesta en síntesis lo siguiente: es hija de la señora ANA ELVIA GONZALEZ BUSTAMANTE, quien era pensionada por invalidez de origen común por Colpensiones desde el 8 de febrero de 1978, en cuantía de un (1) salario mínimo legal mensual vigente; fue calificada por Colpensiones mediante dictamen No. 2015106905EE de julio de 2015, con una pérdida de capacidad laboral del 41.29%, y con fecha de estructuración del 28 de agosto de 2012; le fue practicado un nuevo dictamen ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia No. 587884 del 31 de marzo de 2016, en el que le fue asignada una pérdida de capacidad laboral del 45%, con fecha de estructuración del 28 de agosto de 2012; se practicó un nuevo dictamen ante la IPS UNIVERSITARIA de la Universidad de Antioquia con fecha 1° de marzo de 2017, el cual le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 60.43%, de origen común y con fecha de estructuración el 25 de abril de 2004; dependía económicamente de su madre a la fecha de su fallecimiento, que lo fue el 4 de agosto de 2011; agotó la reclamación administrativa el 12 de mayo de 2017 (fls. 1/2).

Colpensiones dio respuesta oportuna a la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Frente a los hechos manifestó que eran ciertos los que hacen referencia a la condición de hija de la señora Ana Elvia González Bustamante, que ésta era pensionada por parte de la entidad, los resultados de los dictámenes periciales realizados por Colpensiones y la Junta Regional de Calificación de Antioquia, el fallecimiento de la pensionada y la reclamación administrativa. Negó el contenido y la validez del dictamen emitido por la IPS UNIVERSITARIA. De los demás dijo que eran pretensiones objeto de demanda. Como excepciones formuló las que denominó improcedencia de la declaratoria de nulidad de dictámenes de calificación de invalidez, inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de sobrevivientes,

inexistencia de la obligación de reconocer intereses de mora y prescripción (fls. 52/58).

Por su parte, la Junta Regional de Invalidez de Antioquia dio igualmente respuesta oportuna al libelo, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. De los hechos solo aceptó el que hace referencia al dictamen realizado por la misma. De los demás dijo que no le constaban. Propuso como excepción la que denominó inexistencia de fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones (fls. 86/88).

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 26 de julio de 2019, declaró la nulidad de los dictámenes de calificación de invalidez emitidos por Colpensiones y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y, en consecuencia, le dio plena validez al dictamen emitido el 1° de marzo de 2017 por la IPS UNIVERSITARIA, por lo que condenó a Colpensiones a reconocerle y pagarle a la señora ANA BEATRIZ PABÓN GONZÁLEZ la sustitución pensional causada por la muerte de su madre señora ANA ELVIA GONZÁLEZ BUSTAMANTE a partir del 13 de mayo de 2014, generándose un retroactivo pensional hasta el 31 de agosto de 2019 en la suma de \$52.689.326, suma sobre la cual Colpensiones podrá descontar lo correspondiente a las cotizaciones para el Sistema de Salud. A partir del 1° de septiembre de 2019, Colpensiones deberá continuar reconociéndole y pagando a la demandante una mesada pensional en cuantía del salario mínimo legal mensual, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año y los ajustes de ley; al pago de la indexación desde la fecha de causación y hasta el momento del pago efectivo de la obligación. Costas a cargo de Colpensiones, fijándole como agencias en derecho la suma de un salario mínimo legal mensual vigente (\$828.116) (fls. 98/99).

Inconforme con dicha decisión, el apoderado de la parte actora propuso el recurso de apelación que le fue concedido. Manifiesta su disenso frente a la excepción de prescripción señalado que con base en los artículos 151 del C.P

del T y de la S.S., y 488 del C. L., el derecho de acción empieza a contabilizarse una vez se tiene pleno conocimiento del estado de invalidez en tratándose de una sustitución pensional que estaba pendiente de la calificación de la pérdida de capacidad laboral, indicando que si se analiza el dictamen de Colpensiones se avizora que este tiene fecha de julio de 2015, con una pérdida de capacidad laboral inferior al 50%, igual sucede con el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, y es a través de la vía judicial que se le conoce de manera cierta y concreta el estado de invalidez de la señora Ana Beatriz Pabón González, y es a partir de este momento que se empieza a contabilizar el término prescriptivo, por lo que las mesadas causada con antelación al 13 de mayo de 2014 no se encuentran prescritas, por lo que el derecho se debe de reconocer a partir del 4 de agosto de 2011 (fl. 100 min 36:48 y ss).

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

La Sala restringirá su estudio a los puntos objeto de apelación planteados por el apoderado recurrente en la sustentación de su recurso, conforme a las directrices que para el efecto traza el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 y, de ser el caso, las demás condenas impuestas a la entidad en el grado de consulta de conformidad con el criterio expresado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias de tutela del 26 de noviembre, 4 de diciembre de 2013 y 9 de junio de 2015 (Rads. 34552, 51237 y 40200).

No es tema de discusión al interior del plenario que la señora ANA ELVIA GONZÁLEZ BUSTAMANTE murió el 4 de agosto de 2011, siendo pensionada

por el riesgo de vejez por el Instituto de Seguros Sociales -hoy Colpensiones- mediante Resolución 5132 del 23 de mayo de 1978, así como que era la madre de la señora ANA BEATRIZ PABÓN GONZÁLEZ. Tampoco se discute que a ésta última Colpensiones, mediante dictamen No. 2015106905EE del 19 de julio de 2015, la calificó con una pérdida de capacidad laboral del 41.29%, de origen común y con fecha de estructuración del 28 de agosto de 2012, y luego la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia mediante dictamen No. 58784 del 31 de marzo de 2016, la calificó con una pérdida de capacidad laboral del 45% de origen común, conservando la misma fecha de estructuración.

Analizadas las condenas inicialmente en el grado de consulta, el tema central en el de marras se circunscribe a determinar, de un lado, si la señora ANA BEATRIZ PABÓN GONZÁLEZ es inválida conforme a las disposiciones legales y, de serlo, cuál sería la fecha de estructuración de su estado de invalidez, para lo que será necesario y fundamental definir de los dictámenes obrantes al interior del plenario y realizados a la actora, cual es el que muestra la realidad de la condición de inválida de ésta, y a partir de que data se presenta tal situación y, del otro, llegado el caso, si la demandante es beneficiaria de la sustitución pensional causada por la muerte de su madre. Por último, de ser necesario, se analizará el reparo formulado por la parte actora frente a la declaratoria de la excepción de prescripción.

Para condenar a la entidad demandada en todas las pretensiones formuladas en su contra, la juez de instancia, entre otros argumentos, declaró la nulidad de los dictámenes periciales realizados tanto por Colpensiones como por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia a la señora Ana Beatriz Pabón González y, en consecuencia, le dio todo el valor probatorio al dictamen realizado por la IPS UNIVERSITARIA en el que se determinó una pérdida de capacidad laboral de la demandante en un 60.43%, de origen común y con fecha de estructuración el 25 de abril de 2004. A más de lo anterior, consideró que la señora Pabón González dependía económicamente

de la señora Ana Elvia González Bustamante, por lo que era beneficiaria de la sustitución pensional en calidad de hija inválida, dada la muerte de ésta.

Al respecto, cabe anotar que el Juzgador que conozca de una controversia sustentada en diferencias frente a una o más experticias, conforme a la potestad de apreciar libremente la prueba (art. 61 del C.P. del T. y de la S.S.), puede perfectamente acoger aquella que le dé mayor credibilidad o lo persuada mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso, sin que ello implique necesariamente una trasgresión al debido proceso y al derecho de defensa, pues en últimas es el operador como director del proceso quien está revestido de potestades legales para tomar una decisión.

Así lo ha estimado por demás y en decisión reciente la Sala Civil de la CSJ, en sentencia del 15 de junio de 2016, SC 7817-2016 (M.P. Dra. Margarita Cabello Blanco) donde frente a dicha facultad valorativa expresó:

“El Juez, al observar las conclusiones del dictamen, deberá comprender el tema probatorio, primero, desde el perfil científico que lo identifica y distingue y luego interiorizarlo, arropándolo con el manto jurídico y las consecuentes derivaciones, que provocará la sentencia, sin olvidar y sobre ello se reitera, que la potencial relevancia de la prueba científica para esclarecer el hecho o para establecer la convicción sobre la verdad del hecho, no es desde luego absoluta.

No se le puede pedir al Juez que posea una sapiencia igual o superior a la del perito, por lo que el control de la prueba, como ya se esbozó en anotación anterior, se realizará mediante el análisis del grado de aceptabilidad de los conocimientos entregados o por la racionalidad del procedimiento y conclusiones, ponderando con cautela y guiándose por el esquema racional que le permitirá, a través de las reglas de la sana crítica, calibrar y establecer el mérito del medio persuasivo. (...).

Es él quien cuenta con la suficiente formación para desecharla y por ende apartarse de sus conclusiones o darle el mérito total o parcial que encuentre más ajustado al caso. Por ende, se torna en una exigencia sine qua non que debe ofrecer todo dictamen pericial para que pueda admitirse como prueba de los hechos que analiza,

la debida y adecuada fundamentación; “y compete al juzgador apreciar con libertad esa condición, dentro de la autonomía que le es propia”.

En igual sentido, la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia con Radicado 70662 del 6 de diciembre de 2016, en la que se reiteró que:

...en virtud de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal Laboral, en los juicios del trabajo los jueces gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 ibídem les impone la obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, están facultados para darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, pues en tal caso “no se podrá admitir su prueba por otro medio”, tal y como expresamente lo establece la primera de las citadas normas.

Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo afirmado en sentencia de 27 de abril de 1977, inédita, que fue ratificado por la Sala, entre otras, en sentencia de 5 de noviembre de 1998 (Radicación 11.111).

"El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo.

"Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada.

"La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontestable que la verdad

real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho".

Corresponde es los juzgadores de instancia la facultad de establecer el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley, y de allí que el mentado artículo 61 del Código Procesal Laboral les haya otorgado la facultad de apreciar libremente las pruebas, lo que hace que resulte inmodificable la valoración probatoria del Tribunal mientras ella no lo lleve a decidir contra le evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en el proceso.

En los mismos términos, el artículo 232 del Código General del Proceso frente a la apreciación del dictamen señala lo siguiente:

"El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso".

Así las cosas, y descendiendo al caso de autos, se estima no le asiste razón a la juez de instancia en su conclusión de darle mayor valor probatorio al dictamen rendido por la IPS UNIVERSITARIA, toda vez que éste no genera la certeza suficiente respecto de la pérdida de capacidad laboral de la demandante y fecha de su estructuración, ya que, en criterio de esta Corporación, presenta distorsiones frente al estado de invalidez, circunstancia que tiene especial relevancia para las resultados del proceso.

Y es que es precisamente el análisis de los diferentes dictámenes obrantes en el plenario lo que le permite a esta Sala de Decisión, distinto a los argumentos de la juez de instancia, concluir que no existen los elementos suficientes para variar las calificaciones de las patologías de la demandante para declararla inválida a las voces de la norma que le resulta aplicable, por cuanto se evidencia de la "*EPICRISIS O RESUMEN DE LA HISTORIA CLINICA*", que las entidades calificadoras describen básicamente los mismos episodios clínicos con sus respectivas fechas, por lo que no resulta acorde con tal descripción

que se pueda presentar una diferencia de cuando menos 15 puntos porcentuales entre los dictámenes realizados por Colpensiones y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y la IPS UNIVERSITARIA, independiente de la patología psoriasis, pues en gracia de discusión de tenerla en cuenta dentro del dictamen emitido por la Junta, tampoco alcanzaría para considerar a la demandante como inválida, en tal sentido, esta Corporación acoge como dictamen que le genera mayor grado de certeza del estado de invalidez de la demandante el rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia (fls. 29/30), del que se destaca que la pérdida de la capacidad laboral asciende al 45.00%, con fecha de estructuración el 28 de agosto de 2012, y de origen común.

En igual sentido, debe anotar esta Sala de Decisión que analizada la tabla 14 del Decreto 1507 de 2014, la cual contiene la “*valoración del rol ocupacional relacionado con el uso del tiempo libre y de esparcimiento en adultos mayores*”, y en la que específicamente señala las categorías a ubicar a la persona con base en los siguientes parámetros:

“Esta tabla aplica para los mayores de 60 años, no activos laboralmente, teniendo en cuenta que para desempeñar estos roles participan de acuerdo con sus gustos e interés, así como capacidad económica en diferentes actividades familiares y comunitarias, de forma individual o colectiva, acorde a su edad en diferentes contextos, participando en actividades de recreo y ocio, tales como: juegos y deportes informales, programas de bienestar físico, relajación, diversión o entretenimiento, ir a galerías de arte, museos, parques, cines, teatros y lugares públicos o privados; participar en manualidades o hobbies; leer por entretenimiento; interpretar instrumentos musicales; ir a ver paisajes, turismo y viajar por placer, entre otras. También se incluyen actividades como socializar y participar en reuniones informales con otros, o visitar a amigos, familiares y reunirse en lugares públicos, así como las relacionadas con otras áreas ocupacionales tales como: alimentación, la higiene y vestido, el desplazamiento entre otras”

Se evidencia que la calificación otorgada por la IPS UNIVERSITARIA para tal rol resulta elevada, pues ubicó a la señora Pabón González en la categoría D de dicha tabla, la cual describe las condiciones que debe tener la persona y

cuya conclusión de tal categoría es “...*amerita la ayuda de otras personas para el desarrollo de las actividades. La persona presenta una DEPENDENCIA SEVERA*”, con un porcentaje máximo asignado de 35%, siendo que en la descripción clínica del dictamen de Colpensiones con fecha de realización el 19 de julio de 2015, se indica “*HOY A LA VALORACIÓN POR MEDICINA LABORAL, REFIERE QUE CUANDO INICIA A TRABAJAR SE DESCORDINA, SALE A CAMINAR DIARIAMENTE, PERDIDA DEL APETITO, PERDIDA DE LA MEMORIA, HACE 9 AÑOS ULTIMA CRISIS, HACE OFICIOS DE HOGAR, TIENE AMISTADES, VIDA SOCIAL, TIENE BUEN AUTOCUIDADO, PREPARA ALIMENTOS, REALIZA MANDADOS, VUELTAS, MANEJA DINERO, NO PRESENTA ALUCINACIONES, AL PRINCIPIO DE LA ENFERMEDAD REFIERE QUE TUVO INTENTO DE SUICIDIO, ALTUALEMTNE (SIC) MUY SUPERADA EF. CONCIENTE, ORIENTADA, BIEN PRESENTADA, LOCORREICA, HIPERTIMICA, LOCUAZ, NO SE EVIDENCIA DETERIORO COGNITIVO NI MOTOR...*”, condiciones generales que permiten deducir cierto grado de independencia frente a otras personas y no que requiera el acompañamiento de otra para realizar sus actividades, compartiendo entonces esta Corporación la clasificación concedida por la Junta Regional frente a este rol, quien ubicó a la demandante en categoría C, la que contiene como descripción “...*Con las habilidades motoras, de procesamiento y de comunicación cuenta con la capacidad para iniciar, desarrollar y finalizar la adquisición del conocimiento, del cuidado personal, de la movilidad, la ejecución de las tareas básicas o las escolares, el juego y la comunicación mediante el uso de ayudas técnicas para la ejecución de las actividades de juego-estudio. DEPENDENCIA MODERADA*”, con un porcentaje máximo asignado de 25, calificación que para este operador judicial acoge indudablemente en mayor grado la condición clínica de la señora ANA BEATRIZ PABÓN GONZÁLEZ, lo que conlleva de manera reiterada a tener como válido el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia llevado a cabo el 31 de marzo de 2016.

Otro aspecto que llama la atención de esta Sala de Decisión, tiene que ver con la modificación que sobre la fecha de estructuración efectuó la IPS UNIVERSITARIA, pues dentro de las descripciones que realizó incluso en su

dictamen, no aparece relacionado el 25 de abril de 2004, y mucho menos alguna descripción de las patologías sufridas por la actora a dicha fecha, lo que no deja de ser extraño para esta Corporación tal situación, así como el hecho de que en la misma experticia se defina como calificación dentro de las deficiencias 22.40%, pues ese es el resultado de aplicar la fórmula correspondiente con las patologías calificadas, que al sumarmas con las de otras áreas ocupacionales del 35.00%, generaría 57.4%, y no 60.43% como aparece en el dictamen, sin que tal resultado igualmente implique alguna modificación en el análisis realizado.

En este sentido, se hace innecesario el análisis frente al reparo de la declaratoria de la excepción de prescripción, por cuanto al no quedar demostrada la pérdida de capacidad laboral de la señora ANA BEATRIZ PABÓN GONZÁLEZ para el año 2011 de la que pueda ser catalogada como inválida, no resulta del caso hacer alguna mención acerca de dicho asunto más los demás que se pudieran generar en el caso de haberse reconocido la sustitución pensional.

Esta serie de circunstancias, y la aplicación simple y sencilla del principio de que quien afirma un hecho debe respaldar su dicho en la correspondiente probanza, conllevan a la Colegiatura, sin necesidad de mayores elucubraciones a REVOCAR la decisión condenatoria objeto de revisión. Las costas de la primera instancia a cargo de la parte demandante. Sin costas en esta instancia.

DECISIÓN:


En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de apelación y consulta de fecha y procedencia conocidas y, en consecuencia, ABSUELVE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, y a

la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA de todas las pretensiones formuladas en su contra por la señora ANA BEATRIZ PABÓN GONZÁLEZ, con c.c. #32.078.771.

Costas de la primera instancia a cargo de la parte demandante. Sin costas en esta instancia.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por
ESTADOS N° 129 fijados el 26 de julio de 2021
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario